



REDUCCIÓN DE TRABAS ADMINISTRATIVAS A LAS EMPRESAS: ESTUDIOS DE CASOS DEL INFORME “DOING BUSINESS” EN LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS. ESPECIAL REFERENCIA A ANDALUCÍA

José Félix Riscos Gómez. jfelix.riscos@juntadeandalucia.es

Director del Departamento de Estudios de la ADCA.

Carmen Carlota Fernández Arroyo. carlota.carmen.fa@gmail.com

Universidad de Sevilla. Cátedra de Política de Competencia (US).

José Luis García Hidalgo. jgarcia16@us.es

Universidad de Sevilla. Cátedra de Política de Competencia (US).

RESUMEN:

Uno de los aspectos esenciales de la mejora de la regulación consiste en la eliminación de las trabas y obstáculos administrativos en la realización de las actividades económicas. La Unión Europea ha avanzado decididamente en este camino en los últimos años bajo los principios de la *Better Regulation*, y en línea con la Estrategia Europea 2020. En España, la introducción de mecanismos para la mejora de la regulación económica ha estado fuertemente inspirada en las recomendaciones de la Unión Europea y ha abarcado todo un conjunto de reformas normativas de la administración central y de las Comunidades Autónomas. Los principales objetivos de este artículo son fundamentalmente la evaluación de las regulaciones en esta materia entre Comunidades Autónomas y la propuesta de mejoras teniendo en cuenta las mejores prácticas, centrándonos en especial en el caso de Andalucía, todo ello partiendo de los indicadores y los resultados del informe “Doing Business 2015” para España del Banco Mundial. En este sentido, las propuestas de mejora obtenidas a raíz de este análisis se refieren al indicador de apertura de empresa, al de permisos de construcción y al de obtención de electricidad:

ABSTRACT:

One of the essential aspects of Better Regulation Policy is the elimination of red tape in the fulfilment of economic activities. The European Union has made decisive progress in this way in recent years through the principles of "Better Regulation", and in line with the European 2020 Strategy. In Spain, the introduction of mechanisms to improve economic regulation has been strongly inspired in the recommendations of the European Union and has covered a whole set of regulatory reforms of the central administration and the Autonomous Communities. The main objectives of this article are both the regulations assessment in this matter between Autonomous Communities and the proposal of improvements taking into account the best practices, focusing especially in the case of Andalusia all based on the results of the "Doing Business 2015" report for Spain of the World Bank. In this sense, the improvement proposals

obtained as a result of this analysis refer to the indicator of the opening of the company, the construction permits and the obtaining of electricity:

PALABRAS CLAVES: mejora de la regulación, regulación, trabas administrativas, Comunidades Autónomas.

KEYWORDS: better regulation, regulation, red tape, Autonomous Communities.

1. INTRODUCCIÓN

Con la creciente globalización que lleva aparejada la interconexión de las actividades económicas, contar con un marco institucional regulador estable y eficiente se configura como elemento clave de competitividad de los distintos espacios económicos.

En consecuencia, una regulación económica de calidad se convierte en un factor central del buen funcionamiento de las actividades productivas y, por tanto, del crecimiento y el desarrollo económico.

De ahí que la importancia de mejorar la regulación económica haya aumentado significativamente en los últimos años, en gran medida gracias al impulso y las recomendaciones de la Comisión Europea bajo los principios de la *Better Regulation*, y en línea con la Estrategia Europa 2020¹.

Antes de dicha Estrategia, la Comisión Europea publicó una comunicación de gran interés, titulada *Better Regulation for Better Jobs* (2005), donde se pone de manifiesto la preocupación de las autoridades europeas por perfeccionar el marco regulador, mejorar la concepción de la legislación en beneficio de los ciudadanos, reforzar el respeto y la eficacia de las normas y minimizar el coste económico, todo ello siguiendo los principios de proporcionalidad y subsidiariedad. Asimismo, cabe referenciar que en 2015 la Comisión Europea lanzó un paquete de modernización para la mejora de la regulación o *Better Regulation Package*, que refleja la situación actual de la política de mejora normativa en la Unión Europea (UE)².

En España, un primer paso en la introducción de mecanismos para la mejora de la regulación económica se dio con la adopción del Plan Nacional de Reformas (2005). Tras ello una serie de normas institucionalizaron progresivamente la *Better Regulation Policy*, entre las que destacamos: la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, (también conocida como Ley Paraguas), la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio (Ley Ómnibus), la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible y la ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado (LGUM). Por último, la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece las bases con arreglo a las cuales se ha de desenvolver la iniciativa legislativa y potestad reglamentaria de las Administraciones Públicas.

Por lo que se refiere a las distintas Comunidades Autónomas (CC.AA.), se han producido diferentes reformas normativas. Por lo que respecta a la Comunidad Autónoma de Andalucía, destaca la Ley 3/2014, de 1 de octubre, de medidas normativas para reducir las trabas administrativas para las empresas, por la que se establece un marco regulador sobre las actividades económicas acorde con los principios establecidos en la Ley de Garantía de Unidad de Mercado.

¹ La Estrategia Europa 2020 es la agenda de crecimiento y empleo de la UE en esta década. Señala el crecimiento inteligente, sostenible e integrador como manera de superar las deficiencias estructurales de la economía europea. El programa "Legislar mejor" de la Comisión Europea pretende abordar y evaluar las políticas y la legislación de la UE de forma transparente, basándose en pruebas, y con el respaldo de las opiniones de los ciudadanos y las partes interesadas. Comunicación [COM(2010) 2020 final] denominada Europa 2020: Una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador.

² La página de "Better Regulation" de la Comisión Europea está disponible en el enlace: https://ec.europa.eu/commission/priorities/democratic-change/better-regulation_en.

Así, el estudio que nos ocupa consiste en un análisis comparativo para poner de manifiesto las mejores prácticas y los avances más destacados que las distintas Comunidades Autónomas hayan realizado al respecto.

En este contexto cobra relevancia el Informe *Doing Business 2015*³ del Banco Mundial en España 2015 en la medida en que es el primer estudio de carácter regional, donde se analiza mediante casos específicos la regulación de las 17 Comunidades Autónomas y las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla. De esta forma el informe proporciona una medición objetiva de las normas que regulan la actividad empresarial a lo largo de su ciclo de vida, proporciona datos sobre la facilidad para hacer negocios, y recomienda un conjunto de reformas para mejorar los resultados en cada una de las áreas. Por ello, mediante este informe, algunas ciudades pueden comparar sus regulaciones empresariales con otras ciudades vecinas y con el resto de economías que ha evaluado *Doing Business*.

Según los datos disponibles, los indicadores utilizados para analizar la capacidad del sistema económico para crear empresas se corresponden con: Apertura de una empresa, Obtención de permisos de construcción, Obtención de electricidad, Registro de la propiedad, así como un indicador sobre apertura de una Pyme industrial.

Los indicadores seleccionados de dicho informe más relevantes para realizar una radiografía de las trabas existentes en Andalucía, son los de “Apertura de Empresas”; “Permisos de Construcción” y “Obtención de permisos de Electricidad”, elegidos debido a que gran parte de los trámites analizados en estos indicadores cubren el área de la competencia local y exhiben mayor variación regional.

Los resultados obtenidos en el informe *Doing Business*, que miden el número de trámites, el tiempo y el coste, nos servirán como punto de partida para el análisis que llevaremos a cabo en la Comunidad Autónoma de Andalucía, destinado a:

- ⇒ Mejorar la comprensión sobre el papel de las regulaciones en materia empresarial en el desarrollo económico.
- ⇒ Detectar las trabas administrativas existentes para la creación de empresas en esta Comunidad.
- ⇒ Promover las buenas prácticas de otras CC. AA. para simplificar trámites y procedimientos.

Los principales objetivos de este trabajo son, por tanto, evaluar las regulaciones en materia económica y empresarial entre las distintas CC. AA., poniendo especial énfasis en el caso andaluz, y la propuesta de mejoras en este ámbito, de manera que dichas mejoras contribuyan a una regulación más eficiente.

El trabajo se ha organizado como se recoge a continuación: en primer lugar, analizaremos los indicadores “Apertura de Empresas”, “Permisos de Construcción” y “Obtención de permisos de Electricidad”, desde la óptica de la Comunidad Autónoma de Andalucía. A continuación, se incluye una comparación con las mejores prácticas llevadas a cabo en otras comunidades autónomas en relación con los elementos clave del informe *Doing Business*, como son el número de trámites requeridos; su duración en días y los costes asociados a los mismos. Por último, tras el análisis planteado, expondremos propuestas de mejora en el ámbito de los tres indicadores en cuestión con el objetivo de perfeccionar el entorno empresarial para crear empresas en Andalucía.

³ Banco mundial, *Doing Business en España 2015*,
<http://espanol.doingbusiness.org/~media/WBG/DoingBusiness/Documents/Subnational-Reports/DB15-España.pdf>

La principal contribución de este trabajo consiste en la propuesta de posibles mejoras a implantar en este campo, divididas según los tres indicadores analizados: Apertura de empresas, Obtención de permisos de construcción y Obtención de permisos de electricidad.

2. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL INFORME DOING BUSINESS.

El objetivo de este apartado es analizar los resultados obtenidos en Andalucía por el informe *Doing Business* en los indicadores “apertura de empresa”, “permisos de construcción” y “obtención de electricidad”. Para ello, partiremos de la posición que ostenta Andalucía y haremos una comparación con las mejores prácticas detectadas en otras comunidades autónomas.

El informe *Doing Business* 2015 no analiza la totalidad de factores, políticas e instituciones que influyen en el clima de negocios, tales como la estabilidad macroeconómica, el tamaño del mercado, las condiciones del sistema financiero, la formación y capacitación de la mano de obra, la seguridad o la corrupción. Sin embargo, se centra en áreas importantes para el desarrollo de una PYME en la que los gobiernos autonómicos y locales tienen mayor ámbito de actuación.

2.1 Indicador: Apertura de Empresa

A pesar de que la constitución de una empresa en España está regulada en el ámbito estatal⁴, se detectan diferencias por la incidencia de los organismos de asesoramiento a emprendedores y PYMES. En este sentido cabe destacar que en Andalucía existen más de 250 Centros Andaluces de Emprendimiento (CADES) adscritos de la Junta de Andalucía, y que cuentan con servicios totalmente gratuitos de asesoramiento en los trámites de constitución y puesta en marcha de una empresa, además de ofrecer asesoramiento antes y después de la creación de empresas.

Como resultado de dicha labor Andalucía ocupa la primera posición nacional. Mediante el asesoramiento descrito se consigue agilizar el funcionamiento de los organismos implicados y por ello, se reducen comparativamente el número de trámites (un total de 7 trámites), con menos tiempo (14 días) y a un menor coste, fundamentalmente al no existir tasas municipales de inicio de actividad.

Como aspecto a destacar, en Andalucía con los mecanismos establecidos por los CADES, que acompañan al emprendedor durante todo el proceso de puesta en marcha de su actividad, disminuyen sus costes y se acelera la tramitación administrativa. Además, estos trámites se reducen a 2 días para las actividades que pueden presentar una declaración responsable de conformidad con lo establecido en el Decreto 1/2016 por el que se establece un conjunto de medidas para la aplicación de la declaración responsable para determinadas actividades económicas reguladas en la Ley 3/2014, de 1 de octubre.

⁴ La constitución de una sociedad de responsabilidad limitada está regulada en los artículos 19 y siguientes de la Ley de Sociedades de Capital aprobada mediante el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio y en los artículos 175 y siguientes del Reglamento del Registro Mercantil, aprobado mediante el Real Decreto 1784/1996, de 19 de julio, que resultan de aplicación general a todas las sociedades que se vayan a constituir conforme al derecho español.

TABLA 1. RESULTADOS INFORME DOING BUSINESS BANCO MUNDIAL. APERTURA DE EMPRESAS.

TRÁMITE	PLAZO	COSTE	ADMINISTRACIÓN RESPONSABLE
1. Obtener certificado negativo de la denominación social	2 días	16 €	Estatat
2. Apertura de una cuenta bancaria en nombre de la sociedad en constitución, depósito del capital social y obtención del certificado de depósito bancario	1 día	Sin coste	Estatat
3. Rellenar el Documento Único Electrónico (DUE) y concertar cita con el notario	1 día	Sin coste	Estatat
4. Otorgamiento de la escritura pública de constitución; inscripción de la escritura pública de constitución; obtención del número de identificación fiscal definitivo y alta en las obligaciones fiscales; alta de la empresa y de los trabajadores	7 días	728 € [475 € por aranceles notariales + 252,85 € por aranceles registrales]. Se asume que la sociedad tiene un capital social de 217.576,69 €. ⁵	Estatat
5. Obtención del justificante de las tasas de inicio de actividad	1 día	Sin coste	Local
6. Presentación de la declaración responsable de inicio de actividad	1 día	Sin coste	Local
7. Comunicación de apertura del centro de trabajo ⁶	1 día	Sin coste	Autonómica
TOTAL: TRÁMITES 7	14 días	744 €	

Fuente: Informe Doing Business en España 2015

2.2 Indicador: Permisos de construcción

Según *Doing Business 2015*, cumplir con los trámites necesarios para construir un almacén y conectarlo a la red de agua y saneamiento es más sencillo en Logroño y Gijón, mientras que Andalucía ocupa la posición 13 de las 19 CC. AA. analizadas. De esta forma, según el análisis realizado, obtener los permisos de construcción implica 13 trámites, 162 días y un coste de 6,2 % del valor de la construcción. En cambio, la Rioja se sitúa en primera posición, con un proceso de 11 trámites, 101 días y un coste del 3,4 % del valor de la construcción.

⁵ Nota sobre el coste de la Escritura de constitución de la sociedad de responsabilidad limitada Este aspecto está regulado por el Arancel del Notariado, el supuesto establecía un capital social de 217.576,69 EUR. No obstante, en un supuesto habitual en una PYME, con capital inferior a 3.100 y que sus estatutos se adapten a algunos de los aprobados por el Ministerio de Justicia, por todos los conceptos el coste será de 60 euros.

⁶ Simultáneo con el trámite anterior.

Como se desprende de la Constitución (artículos 148.1.3 y 149.1) y de todos los estatutos de autonomía, la competencia legislativa sobre urbanismo y ordenación del territorio ha sido atribuida a las comunidades autónomas. Sin perjuicio de afirmar que, “la competencia autonómica en materia de urbanismo ha de coexistir con aquellas que el Estado ostenta en virtud del art. 149.1 CE, cuyo ejercicio puede condicionar, lícitamente, la competencia de las Comunidades Autónomas sobre el mencionado sector material”⁷. En relación con el ámbito local, los municipios tienen competencia para la elaboración del planeamiento urbanístico para la implementación de la regulación autonómica y garantizar su cumplimiento.

Este indicador es un fiel reflejo de cómo, a pesar del cambio de paradigma en la intervención administrativa sobre el control de los actos de edificación y usos del suelo, la tarea de simplificación administrativa en el ámbito urbanístico es la que más se resiste y donde la casuística normativa respecto de las CC.AA. es más dispar. (Rodríguez Martínez, 2015)

En este sentido, a pesar de que tanto la legislación autonómica como las ordenanzas municipales han ido hilando progresivamente por el camino de la simplificación administrativa y la restricción de los regímenes de autorización en sustitución de mecanismos de intervención *ex post*⁸, como decimos, las distintas CC.AA. han optado por modelos diferentes.

En la siguiente tabla se resumen los resultados obtenidos en el indicador *obtención de permisos de construcción*, que según *Doing Business 2015* se asocian al número de trámites, tiempo empleado y coste necesarios en la obtención de los permisos de construcción para la puesta en marcha de una actividad en la ciudad de Sevilla:

La principal diferencia que encontramos en el régimen jurídico de los trámites para la obtención de los permisos de construcción para la puesta en marcha de una actividad, consiste en que para obtener la licencia de primera ocupación, en las ciudades mejor posicionadas en el ranking, ésta se tramita mediante una simple declaración responsable donde el solicitante hace constar, bajo su exclusiva responsabilidad, que cumple con todos los requisitos técnicos y administrativos establecidos en la normativa vigente para proceder a la apertura del establecimiento. En este sentido, Andalucía ha elegido como sistema preferente de medio de intervención en la materia la figura de la declaración responsable o bien comunicación previa, como así lo establece la disposición adicional decimocuarta de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía.

⁷ STC 61/1997, de 22 de marzo, fdto. Jco. 5º

⁸ JIMÉNEZ FERNÁNDEZ, F. J. (2011) “La inspección urbanística”, en el volumen colectivo coordinado por María Asunción TORRES LÓPEZ y Estanislao ARANA GARCÍA La disciplina urbanística en Andalucía, Tirant lo Blanch, Valencia, pp. 269-358.

TABLA 2. RESULTADOS INFORME DOING BUSINESS BANCO MUNDIAL. OBTENCIÓN DE PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN

TRÁMITE	PLAZO	COSTE	ADMINISTRACIÓN RESPONSABLE
Obtención de la licencia de edificación y actividad	90 días	62.009 € [20.125,8 € (tasa de solicitud de licencia de obra = 1,85% sobre el PEM) + 41.883,5 € (ICIO = 3,85% sobre el PEM). Se asume un PEM de 1.087.883,45 €]	Local
Visado del proyecto básico y proyecto de ejecución ⁹ .	3 días	850 € [Coste de visado= (M x Cc medio x Cf x CI x Ca) €; Módulo (M) =1.093,026; Coeficiente corrector medio (Cc)= 0,65; Coeficiente de la fase (Cf)= 0,95; Coeficiente de localización (CI)= 1,05; Coeficiente de actualización (Ca)= 1,2]	Local
Comunicación previa al inicio de las obras	1 día	Sin coste	Local
Apertura del centro de trabajo ¹⁰ .	1 día	Sin coste	Autonómica
Conexión a redes generales de agua y alcantarillado	1 día	Sin coste	Local
Visado del certificado de final de obra	4 días	45 € [Coste de visado= (M x Cc medio x Cf x CI x Ca) EUR; Módulo (M), previo cálculo de la superficie equivalente (Se) =1.093,026; Coeficiente corrector medio (Cc)= 0,65; Coeficiente de la fase (Cf)= 0,05; Coeficiente de localización (CI)= 1,05; Coeficiente de actualización (Ca)= 1,2]	Local
Declaración de obra nueva e inscripción en el Registro de la Propiedad	17 días	1.043 € [392,72 € (cuota de inscripción) + 644,10 € (gastos notariales) + 6,01 € (cuota de presentación y entrada)]	Estatad
Inscripción en el Catastro	1 día	Sin coste	
Solicitud de la licencia de primera ocupación	1 día	2.013 € [10% sobre el importe de la tasa de licencia de obras]	Local
Inspección final de obra	15 días	Sin coste	Local
Obtención de la licencia de primera ocupación	20 días	Sin coste	Local
Contratación de suministro de agua y alcantarillado	10 días	709 € [553,17 € (Tasas acometida de 25 mm de diámetro interior) 108 € (contador) + 47,60 € (cuota de contratación)]	Privada
Comunicación de comienzo de actividad	1 día	Sin coste	Autonómica
TOTAL: TRÁMITES 13	162 días	66.669 €	

Fuente: Informe Doing Business en España 2015 – Grupo Banco Mundial. En <http://espanol.doingbusiness.org/data/exploreconomies/spain/sub/sevilla/>

⁹ Simultáneo con el trámite anterior

¹⁰ Simultáneo con el trámite anterior

2.3 Indicador: Obtención de electricidad

Con este indicador *Doing Business* mide los trámites, tiempo y coste necesarios para que una PYME obtenga una conexión eléctrica nueva en un almacén. Para que la información sea comparable entre ciudades, se utilizan ciertos supuestos acerca del almacén y la conexión eléctrica: la ubicación del almacén se asume en la periferia, pero dentro de la ciudad, la conexión es de 140 kilovoltios amperios (kVA)⁹ y la longitud de la conexión es de 150 metros¹¹.

Los procedimientos de autorización administrativa de instalaciones de energía eléctrica y sus modificaciones establecidas en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, se tramitarán y resolverán siguiendo lo establecido en el Título IX de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, y en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, en lo que no se oponga a la citada Ley 24/2013, de 26 de diciembre.

En este sentido, según lo establecido en el artículo 53 de la ley del sector eléctrico, para la puesta en funcionamiento de nuevas instalaciones de distribución se requerirá de las siguientes autorizaciones administrativas:

- a) Autorización administrativa previa, que se tramitará con el anteproyecto de la instalación como documento técnico y, en su caso, conjuntamente con la evaluación de impacto ambiental, y otorgará a la empresa autorizada el derecho a realizar una instalación concreta en determinadas condiciones.
- b) Autorización administrativa de construcción, que permite al titular realizar la construcción de la instalación cumpliendo los requisitos técnicos exigibles.
- c) Autorización de explotación, que permite, una vez ejecutado el proyecto, poner en tensión las instalaciones y proceder a su explotación.

En la Tabla 3 se resumen los resultados obtenidos en el indicador *obtención de permisos de electricidad*, que según *Doing Business 2015* se asocian al número de trámites, tiempo empleado y coste necesarios en la obtención de los permisos de electricidad para la puesta en marcha de una actividad en la ciudad de Sevilla.

Como resultado general podemos destacar lo siguiente: obtener una conexión eléctrica de alta tensión (caso del supuesto que se analiza en el informe), requiere de media 7.5 trámites, 128.5 días y el 244.9% de la renta per cápita. Esto es 1,5 veces más engorroso, 23 días más lento y 1,7 veces más caro que la media de los países de la UE. En España, a pesar de que el proceso está regulado a nivel estatal, existen diferencias entre las Comunidades Autónomas. Cataluña es donde más fácil es obtener una conexión eléctrica – se necesitan 6 trámites, 107 días y el 235.7% de la renta per cápita- mientras que en Andalucía se necesitan 8 trámites, 134 días y supone un coste del 232.7% de la renta per cápita, ocupando la posición 13 en la clasificación.

¹¹ Respecto al supuesto de estudio que plantea *Doing Business*, en España lo más común es que la conexión se realice en alta tensión y que sea necesaria la instalación de un centro de transformación.

TABLA 3. RESULTADOS INFORME DOING BUSINESS BANCO MUNDIAL. OBTENCIÓN DE ELECTRICIDAD

TRÁMITE	PLAZO	COSTE	ADMINISTRACIÓN RESPONSABLE
1. Solicitud de punto de conexión a la red de distribución y propuesta tecno-económica de la empresa distribuidora	40 días	Sin coste	Privada
2. Visado de proyecto y certificado de dirección de obra	2 días	300 € [entre 100 € y 400 € cada visado].	Privada
3. Obtención de licencia de calicatas	30 días	1.009 € [2,10% del presupuesto del proyecto por licencia de apertura de calicatas] + [30,34 € los primeros 5 metros lineales + 5,29 € cada metro lineal adicional por ocupación del dominio público para apertura de calicatas] + [3,85% del presupuesto del proyecto por Impuesto sobre Construcciones, Obras e Instalaciones]. Se asume un presupuesto de proyecto de canalización de 16.000 € y 10 metros lineales (y cuadrados) de apertura de vía pública.	Local
4. Obtención de la autorización administrativa ¹²	20 días	Sin coste	Autonómica
5. Realización de las tareas de acometida e instalación de centro de transformación	30 días	46.000 € [por centro de transformación y línea subterránea de media tensión].	Privada
6. Obtención de certificado de inspección inicial	7 días	500 € [entre 400 € y 700 €].	Privada
7. Obtención de la autorización de puesta en marcha e inscripción del centro de transformación	15 días	Sin coste	Autonómica
8. Firma del contrato de suministro y espera a la instalación del contador eléctrico	10 días	2.819 € [79,49 € por derechos de enganche] + [16,99 € cada kilovatio por derechos de acceso] + [360,92 € por intereses perdidos de depósito en garantía]. Se asumen 140 kilovatios de potencia.	Privada
TOTAL: TRÁMITES 8	134 días	50.628 €	

Fuente Informe Doing Business en España

¹² Simultáneo con el trámite anterior.

En este aspecto destacan como buenas prácticas:

- ⇒ Para la puesta en funcionamiento, la modificación o la baja de instalaciones eléctricas de alta tensión ubicadas en Cataluña. Los titulares de estas instalaciones tienen que presentar a la Administración una declaración responsable en la cual manifiesten que cumplen los requisitos preceptivos de acuerdo con el reglamento técnico de instalaciones eléctricas de alta tensión y el resto de normativa aplicable en materia de seguridad industrial y se tienen que comprometer a mantener su cumplimiento durante la vida útil de la instalación. Esta medida de simplificación para instalaciones que sólo suministran a un cliente se contempla con carácter opcional para toda España en el Real Decreto 337/2014 y su Instrucción Técnica Complementaria (ITc-RAT 22)¹³, pero solo se ha implementado en Cataluña, Extremadura y Navarra.
- ⇒ Asimismo, para la solicitud de los permisos de obras, el Ayuntamiento de Barcelona implantó el sistema de tramitación por vía telemática bajo el marco de la Ordenanza Reguladora de los Procesos de Intervención Municipal (ORPIMO), donde se recogen los procesos que hay que tramitar por esta vía con el objetivo de aplicar criterios más eficientes. Esta Ordenanza entró en vigor el día 1 de octubre de 2011.

Este sistema permite completar telemáticamente todo el trámite relacionado con los permisos de obras mediante la aplicación web del Ayuntamiento de Barcelona, incorporando entre otros aspectos: la firma digital a los proyectos (la firma electrónica que emite el Colegio o el DNI electrónico son válidos), el pago electrónico de las tasas municipales (a través de pasarela) y la simplificación para realizar las solicitudes.

De esta forma se consigue reducir el tiempo de tramitación de los expedientes de obras: pasando a un máximo de dos meses, por aquellas actuaciones asociadas al proceso de licencia (obras mayores), un mes para las obras menores Tipo I (comunicado diferido de obras), inmediato para las obras menores Tipo II (comunicados inmediatos) y también para las de Tipo III (noticiosos).

¹³ Art. 20 del RD 337/2014: “Las restantes instalaciones eléctricas de alta tensión que no sean propiedad de entidades de producción, transporte y distribución de energía eléctrica y que no vayan a ser cedidas estarán sujetas al procedimiento de puesta en servicio descrito en la ITC-RAT 22, no siendo necesaria la autorización administrativa”.

3. PROPUESTAS DE MEJORA

3.1 Indicador: Apertura de Empresa

a) Facilitar la comunicación entre los Registros Mercantiles provinciales y las Haciendas Locales

A pesar de que las empresas de nueva constitución están exentas del pago del impuesto sobre operaciones societarias, sigue siendo necesario obtener una declaración fiscal de exención del impuesto. De lo contrario, la inscripción de la sociedad puede ser denegada en los registros mercantiles. Para obtener la declaración fiscal de exención, el emprendedor debe presentar la autoliquidación (exenta) del impuesto junto con la documentación requerida ante las haciendas de las comunidades autónomas.

Asimismo, el emprendedor tiene la obligación de comunicarle a la autoridad laboral competente de la comunidad autónoma la apertura del centro de trabajo en el transcurso de los 30 primeros días después del inicio de actividad. Se trata de una simple notificación que no requiere respuesta por parte de la administración. En todas las comunidades autónomas salvo en Cantabria, Extremadura, y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, se puede enviar el formulario y la documentación correspondiente a través de las páginas web autonómicas. No obstante, es común que los emprendedores sigan realizando este trámite de manera presencial porque a menudo no disponen de certificado digital o porque desconocen que este trámite se puede hacer por internet.

b) Analizar la necesidad de obtener un certificado de denominación social del Registro Mercantil Central

La necesidad de obtener un certificado de denominación social del Registro Mercantil Central complica y añade tiempo a la creación de empresas. En otros países de la Unión Europea, como Portugal, Italia y Suecia, la reserva del nombre no es obligatoria.

c) Eliminar o reducir el requisito de capital mínimo

En la Unión Europea, 5 países no exigen un capital mínimo y otros 5 solo requieren que el capital mínimo sea inferior o igual a 1 EUR o 1 unidad de su moneda local. La legislación española establece que las sociedades limitadas deben constituirse con un capital mínimo de 3.000 EUR.

Sin embargo, esta carga financiera no parece que añada seguridad jurídica, pues tan pronto la empresa queda inscrita en el registro mercantil y obtiene el número de identificación fiscal definitivo, los socios pueden disponer de la cantidad depositada en el banco, por lo que el capital mínimo no estaría sirviendo como una medida útil de protección de los acreedores.

Por ejemplo, Francia redujo el capital mínimo para sociedades limitadas (SL) a 1 EUR en el 2003; y en 2004 el número de SL creadas creció un 17,5%. En 2013, España crea un nuevo tipo de sociedad limitada, la Sociedad Limitada de Formación Sucesiva (SLFS) que permite a los emprendedores constituir una empresa con 1 EUR. No obstante, la SLFS quedaría obligada a desembolsar el resto del capital mínimo legal hasta llegar a los 3.000 EUR. Por tanto, el capital social no se elimina, simplemente se aplaza el pago. En el 2014 la utilización de SLFS para emprender fue baja, sólo se constituyeron 244 sociedades limitadas de formación sucesiva, lo que supuso un 0,26% del total de empresas constituidas.

d) Promover la competencia y la transparencia en los aranceles registrales y notariales

Las últimas modificaciones de la regulación de los aranceles notariales y registrales han destacado por tener entre sus objetivos dotar de claridad al sistema arancelario en aquellas operaciones que pueden tener una especial incidencia la financiación de empresas y particulares, evitando la disparidad de interpretaciones que, en ocasiones, se han producido en la práctica¹⁴.

Sin embargo, a pesar de que los aranceles registrales están fijados por ley, en la práctica no es fácil prever el coste exacto de inscripción en el registro mercantil y algunos registros pueden llegar a cobrar más que otros por inscribir la misma escritura sin fundamento legal. Se podrían además revisar criterios como, por ejemplo, si el número de administradores que tiene una sociedad debiera significar una diferencia en arancel como sucede hoy en día. También existe cierta confusión normativa debido a que unas normas derogan parte de las anteriores y puede resultar complicado saber cuál es el tratamiento legal de un punto concreto.

3.2 Indicador: Permiso de Construcción

a) Mejorar la información disponible sobre la normativa y el proceso a seguir para obtener un permiso de construcción.

La regulación urbanística está en constante cambio normativo. Una breve toma de contacto con las normas urbanísticas puede suponer una odisea al encontrarnos con constantes remisiones y derogaciones de artículos. La complejidad propicia a que diversas interpretaciones den como resultado que se alargue el proceso y las sucesivas interacciones del particular con los agentes que intervienen en el mismo.

Por esta razón, es manifiesta la necesidad de una regulación clara y asequible para el ciudadano, que además cuente con el fácil acceso a un proceso de información y asesoramiento previo gratuito, adaptado a la situación concreta en la que se encuentre el solicitante. En este sentido, el trámite previo de información tendría como objetivo preparar toda la documentación necesaria que la Administración una vez iniciado el proceso le requiera, evitando así paralizaciones en el procedimiento por causas meramente formales.

En Barcelona, a través del portal de trámites del ayuntamiento, el solicitante dispone de una consulta previa online gratuita, donde obtiene de manera instantánea y sencilla, a través de la cumplimentación de unos formularios indicando la tipología de la actuación y el emplazamiento, una hoja de ruta en la que vienen indicados los procedimientos que este debe llevar a cabo y el régimen de intervención aplicable a su obra¹⁵. Adicionalmente, en el mismo portal, se solicita un informe urbanístico gratuito mediante el que se obtiene información sobre como preparar todos los documentos técnicos que se va a necesitar a lo largo del proceso: condiciones urbanísticas aplicables, alineaciones y rasantes, cargas urbanísticas, compatibilidad urbanística de la actividad, autorizaciones adicionales necesarias y aspectos relacionados con la protección del patrimonio arquitectónico.

En Gijón, se ha creado *Te- Crea*¹⁶, una oficina de atención integral para dar respuesta a las personas interesadas en iniciar una actividad económica. A través de la oficina municipal de

¹⁴ Real Decreto 1426/1989, de 17 de noviembre, por el que se aprueba el Arancel de los Notarios.

¹⁵ Ayuntamiento de Barcelona, trámites online,

<https://w30.bcn.cat/APPS/portaltramits/formulari/ptbeobcons/T136/continuar/es/default.html?&stepName=viewFormulariStep>

¹⁶ Ayuntamiento de Gijón, <https://impulsa.gijon.es/page/11433-que-es-tecrea>

atención integral *Te-CREA*, es posible tramitar las licencias de obra, actividad, primera ocupación y apertura, así como la conexión a la red de agua y alcantarillado. Además, el ciudadano recibe asesoramiento en cada una de las etapas. Su objetivo es integrar en una única oficina, los diferentes servicios y tramitaciones que un emprendedor necesita para poner en marcha su iniciativa empresarial, con independencia de la administración, organismo o servicio municipal competente.

Por otra parte, el Ayuntamiento de Valencia ha creado una comisión técnica de homogeneización de criterios de la que forman parte los técnicos municipales responsables de urbanismo y medio ambiente¹⁷, los colegios profesionales —encargados de transmitir posteriormente a sus colegiados las resoluciones y criterios aplicables— y asociaciones de empresarios. Este grupo se reúne cada 15 días para revisar las legislaciones que se superponen o contradicen y establece criterios sobre aquellas normativas que puedan presentar ambigüedades con el objetivo de que todos trabajen en la misma línea.

En definitiva, todas estas iniciativas por parte de los ayuntamientos pretenden conseguir una información previa antes de comenzar un procedimiento caracterizado por mucha casuística que irremediablemente hace necesario un buen conocimiento de la normativa para conseguir aportar, desde un primer momento, toda la documentación necesaria y evitar que el emprendedor se encuentre en un proceso largo y costoso, o incluso incurrir en actuaciones que pueden ser objeto de sanciones administrativas.

b) Extender la declaración responsable y la comunicación previa para la primera ocupación y el inicio de actividad

Comenzar una actividad mediante una simple comunicación previa o declaración responsable —en vez de esperar a la concesión de una licencia de primera ocupación o apertura— puede suponer un ahorro considerable de tiempo para el operador económico¹⁸.

De conformidad con la normativa aplicable, sólo es posible el mantenimiento o la instauración del mecanismo de autorización si este está justificado por razones imperiosas de interés general¹⁹ y es proporcionado, esto es, el objetivo que se persigue no puede alcanzarse con una medida menos restrictiva.

En este sentido, se entiende que habiendo adquirido la licencia de obras con su correspondiente proyecto de ejecución visado por el correspondiente Colegio de Arquitectos, tras la finalización de las mismas y una vez que el técnico competente ha suscrito que el proyecto finalizado se ajusta a la normativa vigente del proyecto, el local, sus instalaciones y la actividad a desarrollar, una declaración responsable puede ser suficiente para obtener la

¹⁷ Puede consultarse en el siguiente enlace:

[https://www.valencia.es/ayuntamiento/urbanismo.nsf/0/DE5DD6BFCB6B0CCCC12581AD002C2A3D/\\$FILE/acuerdo%20plenario%20de%20creación%2030-3-2017_firmado.pdf?OpenElement&lang=1](https://www.valencia.es/ayuntamiento/urbanismo.nsf/0/DE5DD6BFCB6B0CCCC12581AD002C2A3D/$FILE/acuerdo%20plenario%20de%20creación%2030-3-2017_firmado.pdf?OpenElement&lang=1)

¹⁸ Chinchilla Peinado, J.A., “El control municipal de los actos de uso del suelo y edificación a través de la figura de la comunicación previa como alternativa a la licencia urbanística: análisis de la regulación legal y municipal y de la aplicación judicial”, *RDUMA*, nº 242, 2008, pp. 13-85.

¹⁹ El concepto de “razón imperiosa de interés general” no se considera un concepto jurídico indeterminado, desde el momento en que el considerando 40 de la DS remite su interpretación a la realizada por la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea. De este modo se establece una especie de enumeración, no cerrada, sobre lo que cabe entender por razón imperiosa de interés general: el orden público, la seguridad pública, la protección civil, la salud pública, la preservación del equilibrio financiero del régimen de seguridad social, la protección de los consumidores, de los destinatarios de servicios y de los trabajadores, las exigencias de la buena fe en las transacciones comerciales, la lucha contra el fraude, la protección del medio ambiente y del entorno urbano, la sanidad animal, la propiedad intelectual e industrial, la conservación del patrimonio histórico y artístico nacional, y los objetivos de la política social y cultural.

licencia de primera utilización, sin perjuicio de la posterior inspección administrativa. Por tanto, habría que reformular en esta dirección la normativa aplicable.

c) Regulación de las Entidades Colaboradoras de la Administración

A este respecto, conviene poner de manifiesto que en los últimos años se ha ido avanzando en el uso de la figura de entidades privadas colaboradoras de la Administración Pública en el ámbito europeo y para distintos campos de actuación, entre otros puede señalarse en el ámbito de la seguridad industrial, en el medioambiental o en el agroalimentario, que han sido objeto de implantación en las normativas sectoriales aprobadas por diferentes Comunidades Autónomas.

Asimismo, en el ámbito urbanístico, algunas Comunidades Autónomas han optado por este modelo, como es el caso de Madrid, Cataluña o Valencia, con el objetivo de reducir el tiempo necesario para la tramitación de licencias urbanísticas para la puesta en marcha de una actividad. En concreto, la Comunidad de Madrid adoptó el modelo de colaboración de entidades privadas en el ejercicio de las funciones administrativas de verificación, inspección y control en el ámbito urbanístico en la Ley 8/2009, de 21 de diciembre, de Medidas Liberalizadoras y de Apoyo a la Empresa Madrileña (Disposición adicional segunda).

A la luz de lo anteriormente expuesto, y con el fin de seguir avanzado en la labor de minimizar trabas administrativas para las empresas, además de hacer más eficiente la utilización de los recursos públicos y agilizar la tramitación de los expedientes administrativos, se trataría de extender el modelo de entidades colaboradoras de la Administración, actualmente vigente en diferentes campos de actuación (ej. Organismos de control en el área de la certificación de la producción ecológica), para la tramitación de procedimientos de intervención administrativa, como pudieran ser, por ejemplo, el desarrollo de las funciones de control del cumplimiento de los requisitos exigibles en las autorizaciones urbanísticas que llevan a cabo las entidades locales.

Por otra parte, deberá recibir una especial atención en la potencial regulación de estas entidades el control relacionado con el hecho de que la norma no introduzca restricciones de acceso y ejercicio a las entidades colaboradoras privadas de la Administración. A tal efecto, deberán tenerse en cuenta, entre otros elementos, los siguientes:

- ⇒ Que la selección de las entidades colaboradoras se produzca mediante un proceso de concurrencia competitiva en el que se valoren, entre otros extremos, criterios técnicos y de solvencia económica; y que no se establezca un número cerrado de autorizaciones para no excluir a los operadores privados que, cumpliendo los requisitos, deseen ser autorizados, al objeto de facilitar y favorecer la existencia de una competencia efectiva en el mercado.
- ⇒ Que se concreten con claridad los requisitos de acceso, de manera que no supongan barreras de entrada por su carácter indeterminado,
- ⇒ Que se permita a entidades colaboradoras de la Administración que se encuentren legalmente inscritas en otras Comunidades Autónomas el ejercicio de la actividad en Andalucía, de manera que no constituya una restricción territorial.
- ⇒ Que se parta de la premisa de la existencia de una libre fijación de precios por parte de las entidades privadas colaboradoras conlleva ineficiencias estáticas y dinámicas probadas, por lo que es preferible para la promoción de la competencia y para el consumidor que los precios sean libremente determinados por el mercado. En cualquier caso, se pretende fijar precios para evitar la imposición de precios abusivos, las tarifas deberán ser siempre máximas y permitir en todo caso la aplicación de descuentos.

Asimismo, debe tenerse en cuenta que los interesados, a efectos de la valoración de los requisitos, podrán libremente hacer uso o no de los servicios de las entidades colaboradoras de la Administración, sin que de ello pueda derivarse tratamiento diferenciado alguno por parte de la Administración competente para la resolución del procedimiento administrativo de intervención o control de los mismos.

Por último, y dado que en determinados procedimientos administrativos se requiere de unos conocimientos técnicos muy especializados, sería conveniente la prestación de una atención periódica y sistemática de la Administración Pública sobre las actividades o actuaciones realizadas por las entidades colaboradoras autorizadas de cara a prevenir el riesgo de una posible relajación o minoración de las condiciones técnicas de la prestación de los servicios de que se traten, si no se establecen los mecanismos de supervisión adecuados. Es decir, para que el prestador del servicio pueda iniciar el ejercicio de la actividad, debe obtener el reconocimiento de la autoridad competente, tras la inspección que sus instalaciones se ajustan a la normativa vigente, o esperar el transcurso de un mes, en caso de silencio administrativo para iniciar el ejercicio de la actividad. Parece, por tanto, que no estamos ante un régimen de declaración responsable.

3.3 Indicador: Obtención de la Electricidad

Las principales diferencias surgen en el número de requisitos que las Comunidades Autónomas exigen a la hora de autorizar las instalaciones por los órganos competentes de industria y en los trámites a seguir ante el Ayuntamiento. Por lo tanto, nuestro análisis se ha limitado a la normativa autonómica y local que propician más trabas administrativas. Tras el análisis de la normativa que regula los trámites de obtención de electricidad, y la comparación con las mejores prácticas detectadas en otras Comunidades Autónomas, proponemos las siguientes medidas para mejoras del entorno empresarial.

a) Eliminar los visados colegiales del proceso

La Ley Ómnibus regula el contenido del visado y la responsabilidad del colegio profesional derivada del ejercicio de su función de visado, y configura el visado como un instrumento voluntario aunque otorga al Gobierno la potestad de establecer los trabajos profesionales que exigirán visado obligatorio atendiendo a la necesaria existencia de una relación de causalidad directa entre el trabajo profesional y la afectación a la integridad física y seguridad de las personas, y a la acreditación de que el visado es el medio de control más proporcionado.²⁰

Por tanto, se debería suprimir la exigencia de visado colegial para las instalaciones de este tipo. En su lugar, ciudades como Valencia y Vigo piden una declaración responsable por parte del técnico competente.

b) Simplificar los procesos de autorización

Una forma de reducir el tiempo para llevar a cabo la conexión podría conseguirse simplificando los procesos de autorización. En este sentido, algunas Comunidades Autónomas y municipios lleva a cabo prácticas que podrían implementarse en el resto de España. Por ejemplo, en Cataluña, Extremadura y Navarra no exigen autorización administrativa antes de que se realice

²⁰ Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, **Artículo 5 sobre la Modificación de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales y Disposición transitoria cuarta.**

la instalación, lo que en el caso de Andalucía ahorraría una media de 20 días en el proceso, sino que la autorización administrativa se exige para la puesta en marcha de la instalación.

c) Externalizar la comprobación de determinadas instalaciones

Además de las condiciones generales aplicables a este mecanismo de comprobación, señaladas en el apartado anterior, cabe añadir que la externalización de ciertas competencias de la Administración viene fundamentada por el principio de eficacia del artículo 103 de la CE. Cuando la Administración no tiene medios suficientes o carece de técnicos competentes en la materia está motivado acudir a entidades externas que disponen de los conocimientos técnicos que pueden ofrecer al emprendedor un procedimiento sin dilaciones por causas ajenas a su proceder. En concreto, en Barcelona y Valencia, se cuenta con la colaboración de empresas privadas como ACEFAT y OCOVAL para coordinar la información proveniente de diferentes fuentes en el proceso y aligerar la carga de trabajo a municipios que tienen retrasos en la tramitación de expedientes para conceder licencias por faltas de recursos o de personal. Así, por ejemplo, se encargan de tramitar las licencias de acometidas.

4. CONCLUSIONES

En los últimos años se ha extendido el consenso de que el desarrollo y crecimiento económico dependen en gran medida de una regulación económica eficiente y eficaz. Ello explica la importancia que ha dado la UE a la *Better Regulation Policy*, esencialmente a través de las recomendaciones de la Comisión Europea, enmarcadas a su vez dentro de la Estrategia 2020.

En España, la introducción de mecanismos para la mejora de la regulación económica ha estado fuertemente inspirada en las recomendaciones de la UE y ha abarcado todo un conjunto de reformas normativas de la administración central y de las Comunidades autónomas.

Esto ha llevado a que los informes sobre la situación de la regulación en determinados países y regiones cobren una gran relevancia, y dentro de esta tipología de trabajos destaca el Informe *Doing Business* 2015 del Banco Mundial para España. Este informe analiza la regulación de las distintas Comunidades Autónomas que componen España, así como de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, mediante indicadores concretos que proporcionan una medición objetiva del fenómeno estudiado: la regulación que afecta a la actividad empresarial y a la idoneidad para hacer negocios.

En concreto los indicadores del Informe *Doing Business* 2015 en los que se ha centrado este trabajo son aquellos en los que las autoridades autonómicas y locales tienen una mayor incidencia mediante la regulación de las actividades económicas: apertura de empresa, obtención de permisos de construcción y obtención de permisos de electricidad.

Los resultados del citado Informe del Banco Mundial son la base del presente trabajo para el análisis de la regulación económica y empresarial de la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como para el impulso del debate sobre las posibles reformas reguladoras que pueden llevarse a cabo en distintos niveles de gobierno, partiendo de las mejores prácticas reguladoras observadas. Los resultados obtenidos, que miden el número de trámites, el tiempo y el coste, permiten la detección de las trabas administrativas existentes para la creación de empresas, la promoción de buenas prácticas de otras comunidades autónomas para su simplificación; así como fomentar debates acerca de las reformas regulatorias en diferentes niveles de gobierno, ofreciendo oportunidades para que las autoridades locales se ilustren unas de otras, traduciéndose en el desarrollo de capacidades en su ámbito territorial.

En este sentido, de forma esquemática las propuestas de mejora obtenidas a raíz de este análisis son las siguientes:

1. Indicador de apertura de empresa:

- ⇒ Facilitar la comunicación entre los Registros Mercantiles provinciales y las Haciendas Locales.
- ⇒ Analizar la posibilidad de eliminar la necesidad de obtener un certificado de denominación social del Registro Mercantil Central.
- ⇒ Eliminar o reducir el requisito de capital mínimo.
- ⇒ Promover la competencia y la transparencia en los aranceles registrales y notariales.

2. Indicador de obtención de permisos de construcción:

- ⇒ Mejorar la información disponible sobre la normativa y el proceso a seguir para obtener un permiso de construcción.
- ⇒ Extender la declaración responsable y la comunicación previa para la primera ocupación y el inicio de actividad siempre y cuando la normativa sea clara y los mecanismos de verificación los adecuados.
- ⇒ Regulación de las Entidades Colaboradoras de la Administración.

3. Indicador de obtención de electricidad:

- ⇒ Suprimir los visados colegiales para algunas instalaciones.
- ⇒ Simplificar los procesos de autorización.
- ⇒ Externalizar la comprobación de determinadas instalaciones.

BIBLIOGRAFÍA

Monografías y Artículos de Revistas

- Aguado Cuodolà, V. y Noguera de la Muela, B. (Dirs.), *El impacto de la Directiva de Servicios en las Administraciones Públicas, aspectos generales y sectoriales*, Atelier, Barcelona, 2012.
- Barnes, Javier, "El reparto de competencias en materia de urbanismo. El vicio de incompetencia", Fundación Democracia y Gobierno Local, Series Claves del Gobierno Local, nº 5.
- Banco Mundial, Doing Business en España 2015, <http://espanol.doingbusiness.org/~media/WBG/DoingBusiness/Documents/Subnational-Reports/DB15-España.pdf>
Unidad de Análisis e Indicadores Globales del Empresarial del Banco Mundial, disponible en www.enterprisesurveys.org, recuperado 17 de abril de 2018.
- Canals Ametller, D., *El ejercicio por particulares de funciones de autoridad: control, inspección y certificación*, Comares, Granada, 2003.
- Chinchilla Peinado, J.A., "El control municipal de los actos de uso del suelo y edificación a través de la figura de la comunicación previa como alternativa a la licencia urbanística: análisis de la regulación legal y municipal y de la aplicación judicial", *RDUMA*, nº 242, 2008.
- Comisión Europea, Estrategia Europa 2020: Una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, COM(2010) final, Bruselas, 3 de marzo de 2010.
- Cueto Pérez, M., *Procedimiento administrativo, sujetos privados y funciones públicas*, Cizur Menor (Navarra), Thomson Civitas, 2008, pp. 17-18.
- Fernández Torres, J.R., "Regímenes de intervención administrativa: autorización, comunicación previa y declaración responsable", *Revista catalana de Dret Públic*, nº 42, 2011.
- Galán Galán, A., "El ejercicio de funciones públicas por entidades privadas colaboradoras de la Administración", *Anuario de Derecho Municipal*, nº 2, 2009, pp. 63-104.
- González García, J.V., "Autorizaciones, comunicaciones previas y declaraciones responsables en la transposición de la Directiva de Servicios", *Revista d'Estudis Autonòmics i Federals*, nº11, 2010.
- Jiménez Fernández, F. J. (2011) "La inspección urbanística", en el volumen colectivo coordinado por María Asunción TORRES LÓPEZ y Estanislao ARANA GARCÍA *La disciplina urbanística en Andalucía*, Tirant lo Blanch, Valencia, pp. 269-358.
- López Menudo, F., "La transposición de la Directiva de Servicios y la modificación de la Ley 20/1992: el régimen de la declaración responsable y la comunicación previa", *Revista Española de la Función Pública*, nº14, pp. 111-149.
- Lozano Cutanda, B., "Ley Ómnibus: silencio administrativo, declaración responsable y comunicación previa", *Diario La Ley*, 7339.

- Muñoz Machado, S., “Las transformaciones del régimen jurídico de las autorizaciones administrativas”, *Revista Española de la Función Consultiva* (REFC), nº14, julio-diciembre, 2010.
- Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas, *Manual sobre la transposición de la Directiva de Servicios*, 2007.
<http://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/economia/enlaces/destacados/Docu2DS.pdf>
- Padrós Reig, C. *Actividad administrativa y entidades colaboradoras*, Tecnos, Madrid; 2001.
- Paricio Rayo, E., “Cuestiones jurídicas sobre la aplicación de la Directiva de servicios”, *Cuadernos de Derecho Local*, nº21, Dykinson, Madrid, 2009, pp. 142 y ss.
- Razquín Lizarraga, J. A., “El impacto de la Directiva de Servicios en el procedimiento administrativo: autorización, declaración responsable y comunicación”, *Revista Jurídica de Navarra*, nº49, 2010.
- Rodríguez Font, M., “Declaración responsable y comunicación previa: su operatividad en el gobierno local”, *Anuario de Gobierno Local* 2009, pp. 268-300
- Rodríguez Martínez, M. A., “El nuevo régimen de la intervención administrativa sobre los actos de edificación administrativa sobre los actos de edificación y uso del suelo”, *Anales de la Facultad de Derecho*, 32, diciembre 2015, pp.59-84.
- Valera Escobar, G., “El control de la legalidad urbanística a la luz de la Directiva de Servicios: Régimen de las Licencia Urbanísticas en Andalucía”, *Revista Andaluza de Administración Pública*, nº79, enero-abril 2011.

Normativa consultada

- Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio
- Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.
- Ley de Sociedades de Capital aprobada mediante el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio
- Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible
- Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado
- Ley 3/2014, de 1 de octubre, de medidas normativas para reducir las trabas administrativas para las empresas
- Real Decreto 1426/1989, de 17 de noviembre, por el que se aprueba el Arancel de los Notarios.
- Real Decreto 1784/1996, de 19 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Registro Mercantil
- Real Decreto 33/2014, de 24 de enero, por el que se desarrolla el Título II de la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios
- Ordenanza reguladora de Obras y Actividades del Ayuntamiento de Sevilla

Ordenanza reguladora de Obras de Edificación y Actividades del Ayuntamiento de Valencia ,
los requisitos y autorizaciones necesarios para el acceso o ejercicio de una actividad
de servicios

Enlaces web

Ayuntamiento de Barcelona, trámites online,

<https://w30.bcn.cat/APPS/portaltramits/formulari/ptbeobcons/T136/continuar/es/default.html?&stepName=viewFormulariStep>, recuperado el 9 de septiembre de 2019.

Ayuntamiento de Gijón, <https://impulsa.gijon.es/page/11433-que-es-tecrea>

Gerencia urbanismo, Ayuntamiento de Sevilla

[https://www.valencia.es/ayuntamiento/urbanismo.nsf/0/DE5DD6BFCB6B0CCCC12581AD002C2A3D/\\$FILE/acuerdo%20plenario%20de%20creación%2030-3-2017_firmado.pdf?OpenElement&lang=1](https://www.valencia.es/ayuntamiento/urbanismo.nsf/0/DE5DD6BFCB6B0CCCC12581AD002C2A3D/$FILE/acuerdo%20plenario%20de%20creación%2030-3-2017_firmado.pdf?OpenElement&lang=1), recuperado el 9 de septiembre de 2018.

Governo de Portugal, Ministerio de economia e da inovação,

http://www.empresanahora.pt/ENH/sections/PT_inicio.html, recuperado el 9 de septiembre de 2018.